



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

Córdoba, 25 de noviembre de 2022.

Y VISTO

Los autos caratulados: **“DOLGONOS, RICARDO WALTER Y OTROS S/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: DGA”, (Expte. FCB 012000140/2006/TO2)**, seguida en contra de **Ricardo Walter Dolgonos, Inés Reneé Peralta, Lidia Esther Suárez, Norberto Migue Visotszky, Pamela Carla Dolgonos, Yanina Lorena Dolgonos y Micaela Raquel Dolgonos**, todos asistidos por el Defensor Oficial Dr. Jorge Perano y los Sres. **Luis Alfredo Tángari y Jorge Rubén Benítez** ambos representados por la **Dra. María Fernanda Medina**, en la que actúa como representante del Ministerio Público Fiscal el Sr. Fiscal General Dr. Carlos Gonella y como representante de la querellante las Dras. **María Pía Lucini y María Valera Domínguez** a los fines de resolver sobre la homologación de los acuerdos de reparación integral presentados.

Y CONSIDERANDO:

I.- Conforme el requerimiento de elevación a juicio de fs. 2760/2762, a los imputados se le atribuyen los siguientes hechos:

“Desde fecha no determinada con exactitud, pero ubicable aproximadamente en el año 2004 y el año 2008, Ricardo Walter Dolgonos organizó una asociación ilícita con la finalidad de obtener ganancias extraordinarias en el marco de su actividad comercial, para lo cual dispuso el accionar de la asociación hacia la comisión de ilícitos contemplados en el Código Aduanero y en la Ley Penal Tributaria. Para la actividad referida, la asociación dirigida por Ricardo Walter Dolgonos, utilizó las firmas exportadoras MIRO ARGENTINA S.R.L. y ABIMAR S.A., dedicadas a la importación de artículos para bebés y niños (cochecitos, andadores, cunas, triciclos, ropa, etc.), las cuales adquirieron mercaderías a las siguientes firmas del extranjero: ZHEJIANG HEALTHYBABY CO. LTD; FREEDA MOORE INDUSTRIAL CO. LTD; CALLIDA INT'LCO. LTD; TECHWAY INTERNACIONAL INC. y SHINYLAND ENTERPRISE CO. LTD. Los artículos referidos, una vez arribados a la Argentina, eran comercializados al por mayor, principalmente en infracción a las leyes tributarias





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

consumidores finales en negocios ubicados en esta ciudad. De dicha organización y a fin de consumir los ilícitos aludidos, formaban parte las siguientes personas: -Inés Renée Peralta, quien era esposa de Dolgonos y estaba a cargo de controlar la comercialización de la mercadería importada en infracción al Código Aduanero en los distintos comercios que la firma Talisa S.A. utilizaba en la ciudad de Córdoba; -Yanina Lorena Dolgonos y Micaela Raquel Dolgonos, hijas de Ricardo Walter Dolgonos, quienes eran representantes de la firma MIRO ARGENTINA, la cual importaba la mercadería en infracción al Código Aduanero a través de la Aduana de Buenos Aires; -Pamela Carla Dolgonos, hija de Ricardo Walter Dolgonos, quien era representante, junto a su hermana Micaela Raquel Dolgonos, de la firma ABIMAR, que importaba la mercadería en infracción al Código Aduanero a través de la Aduana Buenos Aires; -Jorge Rubén Benítez y Luis Alfredo Tángari, alias “Gordo”, quienes representaban a la firma BenBar S.R.L. (Benítez, Barbieri y Asociados S.R.L.), siendo el primero quien actuó como despachante de aduana en las operaciones documentadas ante la Aduana de Buenos Aires de las firmas MIRO ARGENTINA y ABIMAR, y el segundo, apoderado de Benítez, quien estaba a cargo de la logística de las destinaciones realizadas por Dolgonos y sus hijas. Asimismo, tanto Benítez como Tángari conocían que Ricardo Walter Dolgonos no podía importar y exportar en atención a los antecedentes que registraba con la aduana y que el valor declarado de las mercaderías importadas era inferior al efectivamente abonado en el extranjero. -Norberto Miguel Visotzky, primo de Ricardo Walter Dolgonos, y “operador” y “responsable” del depósito de la firma MIRO ARGENTINA y ABIMAR, sito en calle Balbín Nro. 4043 de la Localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires, donde se recibía la mercadería en infracción y se comercializaba al por mayor y menor, llevando en dicho lugar una doble contabilidad de los productos comercializados tanto en “blanco” como en “negro” de cada una de las firmas aludidas; -y Lidia Esther Suárez, quien era empleada en los locales comerciales pertenecientes a la firma TALISA en Córdoba y aceptó figurar como titular de la misma, habiendo prestado su nombre a Ricardo Walter Dolgonos con la finalidad de que tanto él como su esposa e hijas no figuren como responsables.”.

II. Calificación legal:

Conforme los hechos descriptos en el apartado anterior de este resolutorio, las

conductas enrostradas a los imputados Inés Renée Peralta, Lidia Esther Suárez,
Fecha de firma: 11/09/2023
Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#33904717#350650439#20221125085744871



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

Norberto Migue Visotzsky, Pamela Carla Dolgonos, Yanina Lorena Dolgonos, Micaela Raquel Dolgonos, Luis Alfredo Tángari y Jorge Rubén Benítez han sido calificadas como asociación ilícita, figura prevista y reprimida por el art. 210, 1er. párr. 1ª parte, del C.P., todos en calidad de coautores.

En lo correspondiente a Ricardo Walter Dolgonos, su comportamiento ha sido calificado como asociación ilícita agravada —por su condición de jefe— art. 210, 1er. párr., 2ª parte, del C.P., en calidad de autor.

III. Solicitud del Fiscal y las Defensas de las partes:

Con fecha 16 de septiembre de 2022, el señor Fiscal General Dr. Carlos Gonella y el señor Auxiliar Fiscal Dr. Federico Massei, se presentaron ante este Tribunal solicitando homologación de acuerdo de reparación integral entre los imputados Ricardo Walter Dolgonos, Inés René Peralta, Yanina Lorena Dolgonos, Micaela Raquel Dolgonos, Pamela Carla Dolgonos, Norberto Miguel Visotzky y Lidia Ester Suárez, el señor Defensor Oficial Dr. Jorge Perano y el Ministerio Público Fiscal representado por el señor Fiscal General Dr. Carlos Gonella y el señor Auxiliar Fiscal Dr. Federico Massei, a cuyo texto se remite en razón de brevedad, según el cual se habrían realizado sendas donaciones a la Asociación Civil Vínculos en Red – representada en el acta por la señora Alicia Daniela Peresutti- y a la Fundación Moviendo Montañas representada por el Padre Mariano Oberlin, de la siguiente manera, a saber:

Contrato de intención de compra del inmueble sito en calle La Donosa N° 6275 del B° Sachi de la ciudad de Córdoba, manifestando la defensa que será donado a la Asociación Civil Vínculos en Red.

Asimismo, se manifiesta que se donará la suma de \$ 3.500.000 para la realización de mejoras edilicias a dicho inmueble, las que serán construidas en su totalidad –materiales y mano de obra- por la fundación Moviendo Montañas.

Con fecha 18 de octubre del corriente año, el señor Defensor Oficial Dr. Jorge Perano acompaña testimonio de escritura (1194) de compraventa y estipulación a tercero por la que consta la compra de sus asistidos del inmueble ya descripto y la donación a la Asociación Civil Vínculos en Red.

Por otro lado con fecha 26 de setiembre del corriente año el señor Fiscal





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

presentaron ante este Tribunal solicitando homologación de acuerdo de reparación integral entre los imputados Luis Alfredo Tángari y Jorge Benítez, asistidos por la Dra. María Fernanda Medina por el que se comprometen aportar la suma de \$ 2.500.000 los que señalan serán destinados: \$ 1.950.000 para la realización de tareas de mejoras edilicias del inmueble de calle La Donosa 6275 previamente aportado por los otros imputados de la causa y la suma de \$ 550.00 a destinarse a la fundación Hogar de Cristo para concretar la transferencia de un vehículo automotor Citroën Jumper 440 Minibús modelo 2022 dominio AF567PB que les fuera destinado a través del programa “Vehículo Institucional” de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En audiencia convocada por este Tribunal y celebrada el día 4 de noviembre del corriente, las partes se remitieron a las presentaciones efectuadas, ratificaron su voluntad de solicitar la homologación del convenio celebrado, solicitando que, seguidamente, se proceda a dictar el sobreseimiento de los encartados mencionados, por aplicación del artículo 59, inc. 6° del Código Penal de la Nación, que contempla la causal de extinción de la acción penal basada en la reparación integral del perjuicio.

IV. Análisis jurídico de la procedencia de la petición interpuesta:

Corresponde ahora a este Tribunal ingresar en el análisis de fondo sobre la pertinencia de la petición impetrada por el Ministerio Público Fiscal y las respectivas defensas.

En tal sentido, es preciso consignar que la Ley 27.147, publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio de 2015, modificó el artículo 59 del Código Penal e incorporó nuevas causales de extinción de la acción penal. En lo que aquí interesa, estableció que *“La acción penal se extinguirá: ... 6°) Por conciliación o reparación integral del perjuicio”, señalando que lo será “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.*

De esta manera, la reforma del art. 59 del CP receptó las reglas de disponibilidad de la acción que el Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063) reglamentó en sus artículos 30 y siguientes; normas carentes de implementación a la fecha.

Así, cabe afirmar que el Código Procesal Federal contempla -de manera

Fecha de firma expresa: 25/11/2022 la conciliación como mecanismo de resolución alternativa del conflicto
Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#33904717#350650439#20221125085744871



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

generado por el delito, dentro del elenco de supuestos de disponibilidad de la acción del art. 30, en tanto alude a la reparación solo en forma indirecta, como causal de sobreseimiento (art. 269 inc. g, CPPF).

Ello importa, pues, que la reparación integral del perjuicio opera en el marco de dicha ley procesal como causal extintiva de la acción sin ningún tipo de condicionamiento. En efecto, si bien la norma sustantiva estipula que dicho efecto debe darse *“de conformidad con lo previsto en las leyes procesales”*, lo cierto es que el Código Federal de procedimientos no fija exigencias determinadas para su acaecimiento. En cambio, la conciliación se halla sujeta a la aplicación de un procedimiento particular, lo cual hace evidente que los institutos mencionados son diversos y por lo tanto el tratamiento procesal previsto es diverso.

Al respecto, la doctrina define a la conciliación como *“un mutuo acuerdo, obviamente bilateral, entre el imputado y la supuesta víctima que pone fin a su enfrentamiento”*; en tanto la reparación del daño supone *“el cumplimiento unilateral de las prestaciones comprendidas en la obligación de resarcir satisfactoriamente todas (“integral”) las consecuencias indebidamente producidas con el hecho ilícito. En verdad son instituciones de la realidad y del derecho tan distintas que la reparación puede existir sin conciliación y viceversa”* (Pastor, Daniel R., “La introducción de la reparación del daño como causa de exclusión de la punibilidad en el derecho penal argentino”, DPI, columna de opinión, 11.09.2015).

Por fuera de la citada norma procesal federal y considerando la regulación vigente del Código Procesal Penal de la Nación, la falta de reglamentación del instituto no puede oponerse como obstáculo para la aplicación de una causal de extinción de la acción penal. Una interpretación contraria importaría aceptar que una norma de carácter local puede dejar en letra muerta la legislación común, lo que conduciría a un resultado vedado por la Constitución Nacional.

Sobre el punto, se ha destacado que *“cuando se dice que una ley es dictada por el Congreso como legislatura local es inconstitucional si altera a una ley de derecho común, creemos que el eventual conflicto no proviene de una supuesta jerarquía normativa que haga prevalecer a la última sobre la primera. Lo que ocurre en algunos casos tiene, para nosotros, un alcance distinto, que es el siguiente: una vez*





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

por el art. 67 inc. 11, la ley dictada por el congreso como legislatura local que quebranta esa misma unidad es inconstitucional, pero no porque tenga rango inferior a la legislación de derecho común, sino porque subvierte un principio constitucional, que es el de la ya mentada unidad” (Bidart Campos, German J.; Tratado elemental de derecho constitucional argentino, T. II, Nueva edición ampliada y actualizada, Ed. Ediar. Buenos Aires, 1993, p. 243).

Por su parte, la jurisprudencia se ha pronunciado en forma coincidente, al afirmar que *“no puede interpretarse de modo que la causal de extinción de la acción penal vigente en el texto del inciso 6º del art. 59 del CP permanezca no vigente en aquellas jurisdicciones donde el legislador local omita ejercer su facultad legislativa para reglamentarla. Eso podría llevar a la absurda consecuencia de que las acciones penales se extingan por causales distintas en cada provincia y que algunas queden simplemente sin legislar y. por tanto, no vigentes en la práctica. Para evitar esto, el constituyente sabiamente atribuyó al Congreso la potestad de dictar la legislación común de manera uniforme para toda la Nación” (CFCP, Sala IV, 5/12/2018, “Reina Héctor G. s/ Frustración maliciosa de pago de cheque”).*

Por último, es dable tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que *“una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso” (Fallos: 315:1492, 320:2948, entre otros).*

A tales consideraciones se añade que, si bien el nuevo Código Procesal solo rige en su totalidad en las provincias de Salta y Jujuy, la Comisión Bicameral de monitoreo e implementación del CPPF (Ley 27150 y su Ley modificatoria 27482), es sabido que, mediante la Resolución N°2/2019, hizo operativas en el resto del país algunas de sus normas. Entre ellas, debe citarse el artículo 22, que dispone: *“Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.*

Ello implica un cambio de paradigma en el derecho penal, al propender a la solución de conflictos por mecanismos alternativos a la tradicional imposición de las sanciones penales (prisión, multa e inhabilitación). Con el foco puesto en la víctima del





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

quien de otro modo debería enfrentar un juicio oral con la posibilidad de sufrir una pena — y se favorece la dinámica de la praxis judicial.

En el caso de autos, la Fiscalía presentó al Tribunal acuerdos celebrados con los imputados, por el cual éstos se comprometieron y/o realizaron diferentes donaciones a distintas instituciones, que implicaban la suma de \$ 6.000.000 y un inmueble, con la pretensión que el Tribunal lo homologara, es decir, siguiendo el procedimiento establecido por la conciliación; aunque -contradictoriamente- en su petitorio el mismo representante del Ministerio Público propicia el dictado de sobreseimiento de los imputados, por haberse concretado una reparación integral del daño.

Pues bien, durante el desarrollo de la audiencia, el Fiscal señaló que más allá de que se pidió la homologación del acuerdo, el instituto que se pretendía aplicar era la reparación integral del perjuicio previsto en el art. 59 inciso 6° del Código Penal, lo que en definitiva así habrá de ser considerado.

Dicho esto, considero que el instituto de la reparación integral del perjuicio no resulta aplicable a este caso.

En efecto, la ley 27.147 que modificó el Código Penal y que fue sancionada junto a otras leyes destinadas a poner en marcha el Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063), introdujo nuevas causales de extinción de la acción, entre ellas, la reparación integral del perjuicio, incorporada en el inciso 6.

El art. 59 del Código Penal receptó las reglas de disponibilidad de la acción que el Código Procesal Penal Federal incluyó en sus arts. 30 y sgtes. (criterio de oportunidad, conversión de la acción, conciliación, suspensión del juicio a prueba), otorgándoles a los órganos encargados de la persecución penal -por razones de política criminal- la atribución de no iniciar la persecución, la de suspenderla provisionalmente cuando ya hubiera sido iniciada, de limitarla en su extensión objetiva o subjetiva o de hacerlas cesar antes de la sentencia, aun cuando concurrieran las condiciones ordinarias para perseguir y castigar o la autorización de aplicar penas inferiores a la fijada para el delito por ley, o eximir de ella a quien lo cometió.

Así, el inciso 6 del art. 59 del CP, se inserta en este nuevo paradigma del sistema de enjuiciamiento penal receptado por la Ley 27.063, en el que las soluciones alternativas tienen un rol destacado como herramientas para resolver el conflicto penal.





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

De todos modos, es preciso delimitar los alcances de este instituto, porque el propósito que la inspira, esto es, el arribar a una solución justa que satisfaga a la víctima y al mismo tiempo reponga la paz social, se debe hacer sin desarticular los principios que informan el sistema penal actual y vigente.

En tal sentido, si se repasan otras causales semejantes previstas para la disponibilidad de acción y que conducen directamente a la extinción de la acción, esto es, la aplicación de los criterios de oportunidad, o la conciliación, se verá que todas éstas tienen una característica que las emparenta: debe tratarse de hechos de contenido patrimonial, que no afecten el interés público y que se encuentren sancionados con penas privativas de libertad relativamente menores.

Así por ejemplo, cuando el Código Procesal Penal Federal reglamenta los criterios de oportunidad (art. 31) lo permite si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público y que la intervención del imputado se estimara de menor relevancia y pudiere corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional; y algo similar ocurre con la conciliación (art. 34) que posibilita al imputado y la víctima a realizar acuerdos en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas, o en los delitos culposos si no existieren lesiones gravísimas o resultado de muerte.

Bajo este mismo paradigma hay que evaluar los casos en que se pretende la aplicación del instituto de la reparación integral del perjuicio, porque, aunque no contiene reglas específicas fijadas en el Código Procesal Penal Federal, su alcance debe ser interpretado de un modo que no haga perder coherencia a los supuestos en los que es posible para el Ministerio Público prescindir del ejercicio de la acción.

Es que, además, tampoco se puede prescindir de la propia terminología de la ley. En efecto, si la extinción de la acción está ligada a la reparación integral del perjuicio, parece claro que se tienen que dar dos condiciones: la primera, que se pueda identificar a una víctima –sea persona física o ideal- a la que se le causó un perjuicio; y la segunda que el delito haya ocasionado un daño patrimonial cuantificable, de modo tal que la oferta que realiza el imputado para repararla sea integral.

En el caso, vale recordar que la mayoría de los imputados respecto de los cuales se pide la aplicación de este instituto están acusados de la presunta comisión del





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

prisión de tres a diez años y a uno de ellos en particular se le atribuye responsabilidad como jefe de esa asociación, lo que eleva la pena mínima a los cinco años de prisión.

Es preciso recordar que en general la doctrina considera que la asociación ilícita afecta la tranquilidad de la población en general, por cuanto el fenómeno de la delincuencia organizada implica, por esa sola circunstancia, una razonable amenaza para la seguridad personal y una mayor cuota de alarma social. Se trata de un delito autónomo, formal que afecta al bien jurídico orden público y que se consuma en el momento en que los autores se asocian para delinquir –por el simple hecho de formar parte de la asociación-, prolongándose la consumación como delito permanente (confr. Andrés José D'Alessio, Código Penal Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006 pág. 679/80).

Se ha dicho también que “la razón que fundamenta y legitima, en el marco de un Estado de Derecho, tal adelantamiento de la punibilidad reside en la extrema peligrosidad que entraña la existencia misma de asociaciones de la índole tenida en cuenta por el legislador al concebir este tipo penal y la lesión que ello produce en la tranquilidad y la paz social (Ricardo Núñez, “Derecho Penal Argentino”, Ed. Lerner, Córdoba 1974, pág. 184).

Pues bien, si la asociación ilícita es un delito autónomo, independiente de las acciones delictivas que el grupo comete, y que afecta a la tranquilidad pública, me parece a mí que en el caso la víctima no es una persona física o ideal sino la sociedad en su conjunto, y que el perjuicio económico que la mera reunión de las personas con fines delictivos ocasiona no es cuantificable económicamente.

Consecuentemente, desde mi perspectiva, no es posible aplicar a esta figura delictiva el instituto de la reparación integral del perjuicio previsto por el art. 59 inc. 6° del Código Penal.

Por otro lado, si se considerase por vía de hipótesis que el perjuicio económico que habría ocasionado la asociación ilícita se relaciona con el importe no ingresado debidamente a la Aduana Argentina como consecuencia de las maniobras de contrabando por subfacturación, que ya habrían sido satisfechas por los imputados al acogerse a los beneficios de la ley 27.260 –en el que se dijo que abonaron la suma de U\$S 600.000-, entonces no se explica la razón por la cual se elabora un acuerdo entre el





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

inmueble a la Asociación Vínculos en Red, proponiendo asimismo realizar la donación de la suma de \$ 3.500.000 por parte de Ricardo Walter Dolgonos, Inés Renée Peralta, Yanina Lorena Dolgonos, Micaela Raquel Dolgonos, Pamela Carla Dolgonos, Norberto Miguel Visotzky y Lidia Esther Suárez y 1.950.000 para mejoras del mismo, como así también la suma de \$ 550.000 a la Fundación Hogar de Cristo por parte de los encartados Luis Alfredo Tángari y Jorge Rubén Benítez, cuando en realidad el perjuicio económico se encuentra satisfecho.

En la audiencia, la representante de la Aduana Argentina que actúa como querellante, Dra. María Pía Lucini, fue consultada para que brinde su opinión respecto de la viabilidad de la aplicación del instituto, a lo que respondió que no prestaban conformidad al mismo, pero que no se opondrían. La lectura que cabe hacer a esta afirmación, en mi criterio, es que se oponían a la reparación integral del perjuicio pero que si en definitiva se extinguía la acción penal en el caso la Aduana no iba a recurrir. Aclaró, además, que la Aduana todavía debía percibir de los imputados las multas previstas por el artículo 876 del Código Aduanero en sede administrativa.

De esto se derivan dos cosas: la primera es que, si eventualmente se puede considerar como víctima indirecta de esta presunta asociación ilícita a la Aduana Argentina, no se explica la razón por la cual no se la hizo participar del arreglo económico en forma alguna. Lo segundo, es que, en definitiva, el damnificado indirecto de la maniobra delictiva que se juzga no prestó su consentimiento para la aplicación de este instituto. Esto constituye otro obstáculo insalvable en orden a la procedencia del planteo de extinción de la acción penal por esta vía, porque prescinde de uno de los objetivos esenciales del instituto de la justicia restaurativa que cuenta entre sus metas esenciales la satisfacción de la víctima y su intervención en el proceso de canalización y solución del conflicto.

La cuestión no es menor a la luz del cambio de paradigma que supone la incorporación como causal extintiva de la acción penal de este tipo de institutos y, por, sobre todo, del rol de la víctima, como parte damnificada por el hecho y actor ineludible en el proceso de resolución del conflicto.

Al respecto, Julio Marie aborda este último tema con absoluta profundidad al decir: “La víctima es como consecuencia un protagonista principal del conflicto social,

junto al autor, y el conflicto nunca podrá pretender haber hallado solución integral, si
Fecha de firma: 10/07/2022
Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#33904717#350650439#20221125085744871



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

su interés no es atendido, al menos, si no se abre la puerta para que él ingrese al procedimiento, dado que, en este punto, gobierna la autonomía de la voluntad privada. Sólo con la participación de los protagonistas –el imputado y el ofendido como hipotéticos protagonistas principales- resulta racional buscar la solución del conflicto óptimamente, esto es, de la mejor manera posible. Es por ello que todas las “alternativas a la justicia” o “Alternativas al Derecho o a las formas jurídicas”, que intentan transformar la justicia estatal, por ineficiente, con mecanismos informales de superación de los conflictos, conceden a la víctima un papel central en su solución pacífica. De todos modos, como ya observamos, el papel principal de la víctima es casi imposible de ignorar por la escena de reconstrucción del conflicto que representa el procedimiento penal: el ofendido es un testigo irrenunciable, la mayoría de las veces, razón por la cual, aunque se le niegue derechos, se le impone la obligación de informar en el procedimiento. Reconocer esta realidad en la regulación del procedimiento penal, y permitir la participación de la víctima, tiene, así, carácter imperativo, no sólo desde el punto de vista político, sino antes bien, desde el punto de vista empírico y práctico” (Derecho Procesal Penal, T. II, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2003, pp. 611-612).

Por lo demás, tampoco el Fiscal General ni las defensas alcanzaron a dar precisiones que sirvan como parámetro para establecer que el inmueble que donaron ni la propuesta de donación de dinero (\$ 6.000.000) resulta suficiente para reparar de manera íntegra un perjuicio que ni siquiera fue cuantificado, teniendo particularmente en cuenta que la hipótesis que pesa sobre los imputados era la de formar parte –y en un caso dirigir- una asociación ilícita.

No me condiciona de manera alguna el hecho de que los imputados hayan optado por efectuar las donaciones pactadas antes de que resuelva sobre la pertinencia del acuerdo; porque en definitiva es una decisión que adoptaron con libertad, a sabiendas de que quien tiene la potestad de decidir la cuestión es el juzgador, tras la celebración de la audiencia respectiva.

Valga aclarar que no se trata aquí de discutir -en lo más mínimo- la facultad fiscal de aplicar criterios de oportunidad, ni el poder del Ministerio Público Fiscal de discrecionalidad estratégica, como legítimo titular de la acción pública penal. Solo se

pretende dejar establecido que esa facultad está sometida a reglas, dado que la

Fecha de firma: 25/11/2022

Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#33904717#350650439#20221125085744871



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

reparación integral del perjuicio posee **estándares especiales** que deben cumplirse para su procedencia, entre los que cuenta que se trate de un delito menor, una correcta ponderación del monto del perjuicio y la satisfacción total del daño patrimonial sufrido por los damnificados.

Todas estas deficiencias que muestra el acuerdo presentado por las partes no se pueden soslayar con la sola invocación del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que establece que los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.

Ocurre que esta disposición no supone dar vía libre a acuerdos que no respetan los cánones establecidos por la ley para la aplicación de los diversos institutos que suponen la aplicación de criterios de oportunidad como excepción al principio de legalidad.

Aquella norma rectora, interpretada en forma conjunta con su similar 31 del Código Procesal Penal Federal, como se ha señalado, no está configurado en función de un sistema de libre negociación o “*plea bargaining*”, que domina el sistema acusatorio norteamericano; sino que se encuentra sujeto a ciertas reglas propias del diseño de “oportunidad reglada”.

Precisamente, la inobservancia de esas reglas de interpretación normativa a las que hice alusión precedentemente, es lo que impide convalidar el acuerdo al que arribaron las partes, al menos del modo y en los términos en que fue presentado.

Si de aplicar el principio del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal se trata, la solución alternativa que a mi modo de ver permitía solucionar de mejor modo el conflicto penal habría sido el otorgamiento a los imputados, al menos de aquellos que están acusados de la comisión del delito de asociación ilícita, de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal).

Eso fue intentado por alguno de los imputados en este mismo proceso y en oportunidad de brindar su opinión en el marco de la audiencia celebrada respecto de Micaela Raquel Dolgonos, el Fiscal General al contestar la vista el 18 de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente que me parece pertinente transcribir.

Fecha de firma: 25/11/2022

Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#33904717#350650439#20221125085744871



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

Adujo que resultaba de plena aplicación la recomendación PGN 97/2009, por medio de la cual el Procurador General de la Nación recomienda a los Fiscales oponerse a la procedencia del beneficio si se dan situaciones en las que: *«... se vea afectada la obligación del Ministerio Público Fiscal de velar por el impulso de la acción penal, particularmente en aquéllos supuestos en que deberá llevarse a cabo el juicio oral y público con respecto a otros imputados a los cuales no les corresponda el beneficio, y en los que el agente fiscal, considere que su otorgamiento pueda debilitar la acusación. En estos casos, debe considerarse además que el otorgamiento del beneficio no cumple con uno de sus objetivos, cual es del descongestionar el sistema...»*.

Agregó en esa oportunidad que en el mismo instrumento de referencia se indicó que: *«...La publicidad del juicio debe analizarse también desde el ángulo de los intereses estatales y su vinculación con los fines de la pena, pues en sí misma resulta un instrumento idóneo para producir los efectos preventivo-generales eventualmente atribuidos como finalidad de la pena estatal, puesto que muchas veces el juicio público es más idóneo como emisor de mensajes que el texto legal e implica un modo particular de insertar a la justicia en el medio social al ratificar la efectiva vigencia de los valores que fundan la convivencia»*.

En base a este criterio afirmó Fiscal General que, del mismo modo en que la no celebración del debate oral puede resultar útil para la obtención de los fines del Ministerio Público Fiscal, también puede resultar su realización, concretamente en aquellos supuestos en los cuales únicamente mediante esa forma de resolución del caso resulte posible cumplir con el fin de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad; añadiendo que, en este caso, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados, se estimaba conveniente llevar adelante el juicio.

A eso agregó que motivos de política criminal que avalaban el rechazo de la aplicación de este instituto en casos como el de autos debido a la característica de ofensividad particular de este tipo de conductas, relacionados con los mismos fundamentos que llevaron a sancionar la ley 24.316. Haciendo suyas las palabras transcritas de la cita del debate parlamentario llevado a cabo en el seno del ámbito de discusión producido en la honorable Cámara de Diputados de la Nación expresó, en lo

que a sus argumentos de política criminal refieren: *«...No puede ser que en las cárceles*

Fecha de firma: 25/11/2022

Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#33904717#350650439#20221125085744871



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

estén sólo los “ladrones de gallinas” –como se dice vulgarmente- y que la política criminal del Estado argentino no pueda ser más eficaz con cuestiones como el narcotráfico, la delincuencia económica o la corrupción en el Estado, que están evidenciando la presencia de una crisis moral como la que se vive hoy en el país ...La institución del juicio a prueba va a significar...que a través del nuevo procedimiento oral penal los delincuentes que más ofenden a la sociedad argentina, los que atacan los bienes jurídicos que más deben ser protegidos, sean condenados como corresponde. Si los bienes personales y materiales con que cuenta la administración de justicia son destinados a juzgar los delitos más graves, se modificará la credibilidad de la justicia penal. (Del debate parlamentario en Diputados, 02/06/1993)».

En la audiencia celebrada a efectos de tratar la petición de la defensa, el representante del Ministerio Público afirmó que el organismo que representaba era una estructura jerárquica cuya función debía atender los lineamientos generales establecidos por las resoluciones que definen la política de persecución penal frente a fenómenos criminales definidos como prioritarios por el organismo, lo que se ve materializado en las distintas procuradurías. Señaló que al rechazar el pedido lo hizo sobre la base de razones de política criminal, cuyos argumentos fueron dados en forma específica para cada uno de los acusados, a quienes se les atribuía el delito de asociación ilícita, el que consideraba que no era un delito menor. Al respecto afirmó que, si bien el mínimo de pena de prisión era de tres años de prisión, el mismo constituía un delito grave cuya pena máxima es muy superior.

Agregó que las razones de política criminal eran las que obraban en las discusiones parlamentarias en las que se estableció que la suspensión del juicio a prueba era una alternativa para descongestionar el sistema, una solución que buscaba la pacificación social y dar respuesta del Estado a conductas o infracciones de menor cuantía. En el caso -señaló-, se estaba frente a un delito grave, que afecta la seguridad y la tranquilidad pública toda vez que la asociación ilícita endilgada es un delito pluriofensivo que afecta asimismo el ejercicio regular del Estado en el control fronterizo.

Refirió que independientemente a que los encartados se hayan acogido a un beneficio, el impacto al bien jurídico protegido no desapareció, siendo que para el

Ministerio Público había una política criminal con prioridad de perseguir, por la cual la
Fecha de firma: 02/06/2011
Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#33904717#350650439#20221125085744871



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

suspensión de juicio a prueba no resultaba, a su modo de ver, el mecanismo legal adecuado para dar respuesta al presente caso, señalando que dicha respuesta se debe encontrar en el juicio oral y público.

En función de estos argumentos, que se plasmaron en el decisorio del 17 de mayo de 2021, este Tribunal, con integración unipersonal de otro magistrado, rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba de Micaela Raquel Dolgonos, por falta de consentimiento del Fiscal General.

Pues bien, como no me quiero desentender del hecho de que los imputados ya ejecutaron parte del acuerdo que presentaron ante mí, en aras de cumplir con el mandato del 22 del Código Procesal Penal Federal, considero que sería pertinente volver a analizar la posibilidad de que el caso se resuelva por vía del instituto previsto por el art. 76 bis del Código Penal, cuyos requisitos y obligaciones por cierto son diferentes a los de la reparación integral del perjuicio, sobre todo a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Acosta” (Fallos 331:858). Más aún cuando los términos del acuerdo presentado darían la pauta de que el Fiscal General habría variado parcialmente su criterio respecto de la necesidad de realizar el debate.

En todo caso, la cuestión por cierto quedará condicionada a que exista un pedido concreto por parte de los imputados, en cuyo caso se fijará otra audiencia para escuchar la opinión de la querella y se preguntará al Fiscal General si presta su consentimiento, requisito excluyente para el otorgamiento del beneficio, a la luz del Plenario n° 5 de la Cámara Federal de Casación Penal “Kosuta, Teresa Ramona” que en ese aspecto sigue vigente.

Por ello,

SE RESUELVE:

NO HACER LUGAR al pedido de extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio, acordado por el Fiscal General y los imputados de Ricardo Walter Dolgonos, Inés Renée Peralta, Lidia Esther Suárez, Norberto Miguel Visotsky, Pamela Carla Dolgonos, Yanina Lorena Dolgonos, Micaela Raquel Dolgonos, Luis Alfredo Tángari y Jorge Rubén Benítez (arts. 59, incs. 6° a contrario sensu del Código Penal).

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.-





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 12000140/2006/TO2

Fecha de firma: 25/11/2022
Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#33904717#350650439#20221125085744871